

ron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*S. Lerdo de Tejada.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José Arteaga.*—*J. M. Lafraqua.*—*Ignacio Ramírez.*—*M. Anza.*—*S. Guzman.*—*Luis Velazquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Luis María Aguilar*, secretario.

Son copias que certifico. México, Agosto doce de mil ochocientos setenta y uno.—*Lic. Agustín Peralta*, oficial mayor.

AMPARO.

Juicio promovido ante el Juzgado de Distrito de Coahuila por Feliciano Saldaña contra el gobernador del Estado por violacion de garantías.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El promotor fiscal dice: que ha visto el ocurso de Feliciano Saldaña en que solicita amparo por violacion de garantías individuales, y el informe del C. gobernador del Estado que es quien se dice por el ocurrente la autoridad ejecutora del acto que se reclama. De uno y otro se viene en conocimiento, que desde el mes de Junio del año próximo pasado se redujo á Saldaña á prision por faltas al servicio militar, consistiendo estas en el extravío de los pliegos que conducía para Candela y el hurto del caballo y arma que portaba: que remitido á esta ciudad por la autoridad política de la villa de Ramos Arispe que fué la que hizo la aprehension, fué consignado por el gobierno del Estado al Juez de letras del ramo criminal, quien no obstante su incompetencia estuvo conociendo de su causa hasta el día 18 del mes próximo pasado, en que habiéndose declarado incompetente para conocer de ese delito remitió las diligen-

cias practicadas al gobierno del Estado. Este no admitió la consignacion que le hizo el Juzgado de letras y en tal estado las cosas se solicita el amparo por creerse violadas las garantías que conceden los artículos 14, 16 y 19 de la Constitucion y hallarse el caso comprendido en la fraccion 1ª del artículo 1º de la ley de 20 de Enero de 1869.

Desde que el Juzgado de Letras se declaró incompetente para seguir conociendo del asunto, quedó sin valor el auto de formal prision, y no obstante, Saldaña sigue preso sin que haya un juez que conozca de su causa. La violacion de garantías es notoria, y si bien el quejoso señala como autoridad ejecutora al gobernador del Estado que por cierto no tiene ingerencia en este asunto, una vez que se desprendió de todo conocimiento y no admitió la nueva consignacion que se le hizo del reo, el ministerio público cree de su deber manifestar que la autoridad remediata ejecutora del acto que se reclama es sin duda alguna el Juez de letras de lo criminal, pues Saldaña se encuentra en la cárcel pública en virtud del auto de formal prision que este dictó en la causa que le instruía.

En virtud de lo expuesto, el Promotor fiscal propone á vd. mando suspender el acto que se reclama, previo el informe del Juzgado de letras de lo criminal.

Saltillo, Abril trece de mil ochocientos setenta y uno.—*Lic. Santos de la Garza y Gutierrez.*

Otro Pedimento del C. Promotor fiscal.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal en el juicio de amparo promovido por Feliciano Saldaña, evacuando el traslado para pedir sobre lo principal, dice: que en su anterior pedimento solicitó la suspension del acto reclamado, por creer notoria la violacion de garantías individuales, pues sin otros antecedentes

que el solo informe del O. gobernador del Estado, que fué la autoridad contra quien se solicitó, comprendió que Saldafia ha sufrido una prision arbitraria decretada en su persona por el Juzgado de letras de lo criminal de este Distrito, violándole las garantías que la Constitucion concede al hombre en sus artículos 16 y 19.

Si el Juzgado de letras, segun el mismo confiesa en la comunicacion transcrita por el O. gobernador y que acompañó á su informe, era incompetente para terminar la causa que le instruía por tratarse de un delito ó falta que tenia estricta conexión con el servicio militar, puesto que esta consiste en el extravío de unos pliegos que con el carácter de soldado de las fuerzas de los destacamentos organizados por cuenta del Estado conducia para la Villa de Candela y el hurto del caballo y arma que portaba, no pudo legalmente dictar auto de prision en contra de ese reo, y la que ha sufrido de mas de diez meses es atentatoria, pues que la Constitucion dice testualmente en su art. 16: "Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles y posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la *autoridad competente* que funde y motive la causa legal del procedimiento." Y el 19: "Ninguna detencion podrá exceder del término de tres dias sin que se justifique con un auto motivado de prision y los demas requisitos que establezca la ley. El solo lapso de este término, constituye responsables á la autoridad que la ordene ó consienta y á los agentes, ministros y alcaides ó carceleros que la ejecuten."

Si el gobernador del Estado no admitió la consignacion que del reo lo hizo, debió ponerlo en libertad aunque se tratara de un delito gravísimo, pues como ha dicho el fiscal en su anterior dictámen, con la declaracion de incompetencia, quedó sin valor ni efecto alguno el auto de formal prision, y esta excedia en mucho al término fijado por la ley, pues que tenia nada menos que diez meses. Como el gobernador

del Estado fué la autoridad que el quejoso señaló como ejecutora del acto que se reclamaba, afirmando en su ocurso que habiéndosele remitido el proceso pasaron ocho ó mas dias en que lo tuvo en su poder y no se lo consignó al Juez que debia juzgarlo, ni se dictó por él su formal prision, el juzgado le pidió el informe respectivo, pero de él se conoce que el ocurrente sufrió una equivocacion, que tal vez no estuvo en su mano preveer. Sabia que el juez que lo procesaba despues de diez meses se declaró incompetente y lo consignó al gobierno del Estado, y era natural suponer que desde que le notificaron el auto en que se disponia tal cosa quedaba á disposicion de esa autoridad. Nota el fiscal que la comunicacion del Juzgado de letras al gobernador del Estado, declarándose incompetente y consignándole el reo, tiene la misma fecha que la contestacion en la que no se le admite. Es pues evidente, que Saldafia no ha estado un solo dia á disposicion del gobierno.

En vista de esto, el fiscal, creyendo de su deber subsanar este error, para corresponder dignamente á la mision que la ley le encomienda en estos juicios, propuso se pidiera el informe de que habla el art. 59 de la ley de amparo al Juzgado de letras de lo criminal, pues si bien ésta no considera como parte en estos recursos á las autoridades que ejecutan ó tratan de ejecutar los actos que los motivan, si los concede el derecho de informar con justificacion sobre los hechos y las cuestiones de ley que se versen, no debiendo por lo mismo sustanciarse estos sin llenar ese requisito. Pero el juzgado suplente que conoció del asunto, en los dias que vd. estuvo separado, sin consultar con letrado como está prevenido por la ley que lo hagan los legos, resolvió que el alcaide era la autoridad ejecutara y que á él se le notificara pusiera en libertad á Saldafia, otorgando previamente fianza de estar á derecho, y disponiendo con fecha 21 del mes próximo pasado se le pidiera informe con justificacion,

el cual no rindió despues de haber pasado veintidos dias, por lo que vd. decretó se corriera traslado á este ministerio para que pidiera sobre lo principal.

Juzgo que lo dicho es bastante á comprender: que el juzgado de letras de lo criminal es la autoridad ejecutora del hecho que ha motivado este recurso; pero para mayor esclarecimiento haré notar, que el art. 101 de la Constitucion y el 1º de la ley orgánica hablan de autoridades, y por cierto, que los alcaldes no están investidos de ese carácter, pues no ejercen poder público. En el juicio de amparo promovido por el Lic. D. Ignacio Galindo en representacion de Dª Luisa Ibarra de Zuloaga, contra los comisarios de policía de San Juan Bautista, San Lorenzo de la Laguna y Colonia de San Pedro, manifesté mi opinion relativa á qué autoridades se contrae la ley de amparo y por esto es que me abstengo de tratar aquí esta cuestion. Si al juzgado le pareciere oportuno puede ver mi pedimento en ese negocio, pues con este objeto ago esa referencia.

El juzgado en vista de lo expuesto subsanará, si creyere conveniente, la nulidad de que me he ocupado, haciendo que se rinda el informe por la autoridad que corresponde.

Solo me resta para concluir hacer presente que no existe constancia alguna de que se haya dado cumplimiento al auto de fecha 18 de Abril próximo pasado en que se manda que Saldaña sea puesto en libertad, y sujetar á la consideracion de vd. con fundamento en los artículos 16 y 19, 101 y 102 de la Constitucion general, y la ley orgánica de estos últimos, de 20 de Enero de 1869, las siguientes

PROPOSICIONES.

Primera; La justicia de la Union ampara y protege á Feliciano Saldaña contra el acto del Juez de letras de lo criminal de este Distrito por el cual lo ha mantenido preso desde el mes de Junio del año próximo pasado.

Segunda; quedan á salvo sus derechos para exigirle al mencionado Juez la responsabilidad respectiva.

Saltillo, Mayo veinte de mil ochocientos setenta y uno.—*Lic. Santos de la Garza y Gutierrez.*

Sentencia del O. Juez de Distrito.

Saltillo, Junio veintiseis de mil ochocientos setenta y uno.

Visto este juicio de amparo promovido por el reo Feliciano Saldaña, contra el C. gobernador del Estado, por haberlo violado, segun afirma, las garantías que le otorga la Constitucion general de 57 en sus artículos 13, 14, 16 y 19, manteniéndolo ocho dias preso en la cárcel de esta ciudad sin consignarlo al juez competente y dictar su auto de formal prision: el informe rendido por este funcionario, que se dice ejecutor, y del cual aparece, que el expresado reo fué consignado al juez del ramo de lo criminal de este Distrito desde 20 de Junio del año próximo pasado para que fuese juzgado de conformidad con las leyes vigentes; y que no ha aceptado la nueva consignacion que de él se le hizo el 20 de Marzo del corriente año, en que el expresado funcionario se declaró incompetente para terminar la causa de Saldaña: el parecer del O. Promotor fiscal, en que pide la suspension del acto reclamado; lo resuelto sobre este punto por el juez tercer suplente de este juzgado, en sustitucion del que suscribo, que se hallaba á la vez disfrutando de una licencia concedida por la Suprema Corte de la Nacion: el auto en que mandó se pidiera informe con justificacion al alcalde de la cárcel, por ser en su concepto la autoridad ejecutora del acto reclamado: el auto en que se mandó abrir este juicio á prueba: el que se dictó mandándose se dejaren los autos en la secretaría para que las partes alegaren de su derecho: y por último, el auto de citacion para sentencia,

y todo lo demas que debió verse, consta de autos y ver convino.

Considerando: que el C. gobernador del Estado consignó al quejoso con fecha 30 de Junio del año anterior al Juez del ramo de lo criminal por extravío de unos pliegos que conducía á Candela, y hurto del caballo y arma que llevaba, permaneciendo á disposicion de este funcionario hasta el 20 de Marzo del corriente año en que, á solicitud del defensor del expresado Saldaña se declaró incompetente para terminar su causa, manifestándolo así al gobierno del Estado, como que el reo quedaba á su disposicion en la cárcel pública de esta ciudad, para que si lo tenia á bien dispusiese fuera juzgado y sentenciado por los jueces de su fuero, cuya consignacion no fué admitida segun consta á fojas 4, 5 y 6 de estos autos: que no habiéndose admitido por el gobierno la referida consignacion, no puede decirse que él sea el responsable de la prision que sufría Saldaña, despues de habérsele notificado el auto de incompetencia sentado por el referido empleado y al alcaide de la cárcel que manifestamente infringieron los artículos 16 y 19 de la carta fundamental de la República el primero haciendolo permanecer en ella despues de haber declarado que no tenia jurisdiccion sobre él, y el segundo consintiendo su prision mas del tiempo señalado por el artículo 19 de la referida carta fundamental para dictar el auto de bien preso á cualquier individuo. Por estas consideraciones, de conformidad con lo pedido por el C. Promotor fiscal y con fundamento en los artículos 16 y 19 de la Constitucion federal, falla.

Primero; La justicia de la Union ampara y protege al reo Feliciano Saldaña, contra el acto del Juez del ramo de lo criminal de este Distrito, despues de haberse declarado incompetente para terminar su causa, así como contra el acto del alcaide de la cárcel que consintió su detencion ó permanencia en ella mas del tiempo señalado en el art. 19 del código fundamental; no hacien-

dolo contra el C. gobernador del Estado, por no haber este violádolo garantía alguna.

Segundo; Notifiquese á quienes corresponda y remítanse en seguida estos autos á la Suprema Corte de la Nacion, publicándose esta sentencia por los periódicos como lo previene la ley.

Así definitivamente juzgando lo decretó, mandó y firmó el C. Juez de Distrito del Estado por ante mí. Doy fé.

Es copia que certifico. Saltillo, Junio veintinueve de mil ochocientos setenta y uno.—Doy fé.—*Florentino Seguin*, secretario.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Agosto nueve de mil ochocientos setenta y uno.

Visto el juicio de amparo que en 27 de Marzo del presente año, promovió ante el Juez de Distrito del Estado de Coahuila Feliciano Saldaña, preso en la carcel del Saltillo, alegando: que desde el mes de Junio del año anterior, la autoridad política de la Villa de Ramos Arispe, previa disposicion del gobierno del Estado, lo redujo á prision por faltas en el servicio militar á que en esa época pertenecía; y remitido al Saltillo, el mismo gobierno lo consignó al C. Juez de letras del ramo criminal, quien no obstante su incompetencia habia estado conociendo de su causa hasta el dia diez y ocho del mes en que promueve que á solicitud de su defensor, se declaró incompetente pasando los autos al superior gobierno, para que se remitiesen al que debiera juzgarlo: que era evidente que con la larga prision que se le habia hecho sufrir, se le habian violado las garantías individuales que le otorga la Constitucion federal, subiendo de punto esa violacion desde el momento en que remitidos los autos al gobierno y declarada la autoridad que los formó incompetente, quedaron nulos

aquellos y por consiguiente el de formal prision que dictó el Juez de letras de lo criminal; y que á pesar de haber pasado ocho ó mas días en poder del gobierno, aun no se le consignaba al Juez competente, ni se dictaba por el la formal prision, siendo por tanto ilegal la que sufrió y sufría actualmente, con lo que se han violado las garantías que le aseguran los artículos 13, 14, 16 y 19 de la Constitución antes citada.

Visto el informe del C. gobernador de Coahuila, manifestando: que el quejoso malamente expone estar á disposicion del gobierno, cuando se haya consignado á la autoridad judicial desde el año anterior; que si el Juez de lo criminal á cuya disposicion se puso para que fuese juzgado y sentenciado conforme á las leyes por el delito que cometió, despues del tiempo trascurrido, se ha declarado incompetente para conocer de ese delito, el gobierno una vez que se desprendió de todo conocimiento en el asunto, no habia admitido la nueva consignacion del reo, quien ha estado y está á disposicion del Juzgado de letras del ramo criminal del Distrito del centro, habiéndoselo devuelto la causa para la determinacion que estimara conveniente.

Vistos los documentos que acompaña á su informe el C. gobernador; uno, copia del auto en que el repetido Juez de lo criminal se declaró incompetente en la causa que instruía al soldado Feliciano Saldaña, por extravio de pliegos y hurto de un caballo y armas, consignando el reo al gobernador para que dispusiese que fuera juzgado por los jueces de su fuero; y otro, copia de la respuesta del gobernador rehusando que se le consignara de nuevo el acusado.

Vistos los pedimentos del C. Promotor fiscal; la sentencia del Juez de Distrito y todo lo demas que ver convino. Considerando:

Primero; que en la causa que instruyó á Saldaña el Juez de letras de lo criminal, por extravio de pliegos y hurto de un ca-

ballo y armas, segun las constancias, pronunció como Juez competente el auto de formal prision de ese reo.

Segundo; que el hecho de que el Juez de lo criminal, meses despues, se declarase incompetente, no ha revocado ni menos anulado aquel auto, el cual conforme á derecho debe considerarse que subsiste mientras no declare lo contrario el Juez competente, que conozca de la causa.

Tercero; que una vez declarada por el Juez de lo criminal su incompetencia, y habiéndose rehusado el gobernador á recibir la nueva consignacion del reo, debió el Juez haber decretado y hecho la remision del reo y su causa, á la autoridad judicial que creyese competente para seguir el juicio.

Cuarto; que si el Juez de lo criminal hubiera pulsado grave dificultad para proceder de ese modo, debió al menos someter la resolucion del caso al superior que correspondiese, en el órden judicial, y

Quinto; que el procedimiento del Juez de lo criminal envuelve dilaciones é irregularidades en perjuicio de la buena administracion de justicia, se resuelve:

Primero; con fundamento del art. 101 de la Constitución de la República y de la ley de 20 de Enero de 1869, es de revocarse y se revoca la sentencia del Juez de Distrito de Coahuila pronunciada en 26 de Junio último que dice: "La justicia de la Union ampara y protege al reo Feliciano Saldaña, contra el acto del C. Juez del ramo de lo criminal de este Distrito, despues de haberse declarado incompetente para terminar su causa; así como contra el acto del alcaide de la carcel que consintió su detencion ó permanencia en ella mas del tiempo señalado en el art. 19 del código fundamental, no haciéndolo contra el gobernador del Estado por no haber éste violádole garantía alguna."

Segundo; la justicia de la Union no ampara ni protege á Saldaña, por no haber la violacion de garantías de que se queja.

Tercero; compúlsese testimonio de la sentencia del Juez de Distrito y de los documentos que acompañó el gobernador á su informe, y remítanse al Tribunal del Estado de Coahuila, por la responsabilidad que pueda resultar al Juez de lo criminal referido; y lo acordado.

Devuélvanse las actuaciones al Juzgado de su origen con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*S. Lerdo de Tejada.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José Arteaga.*—*J. M. Lafraqua.*—*P. Ordaz.*—*Ignacio Ramírez.*—*M. Anza.*—*S. Guzman.*—*L. Velazquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Luis M. Aguilar,* secretario.

Son copia, que certifico. México, Agosto veintitres de mil ochocientos setenta y uno.—*Lic. Agustín Peralta,* oficial mayor.

COMPETENCIA.

Entre el juez 2º de lo civil de México y el de 1ª instancia de Durango, para conocer del juicio que D. Juan N. Flores sigue contra D. Pedro y D. José M. Martínez sobre rescision de un contrato de compañía y rendicion de cuentas.

PEDIMENTO DEL C. FISCAL.

El fiscal dice: que ha examinado los voluminosos autos que se tienen á la vista. Ellos versan sobre la competencia que el juzgado 2º de lo civil de México ha suscitado al 1º del ramo criminal de Durango, por excusa ó impedimento de los del ramo civil para conocer del juicio que D. Juan N. Flores sigue contra D. Pedro y D. José

M. Martínez, sobre rescision del contrato de compañía y rendicion de cuentas.

El suscrito ha estudiado detenidamente las razones en que cada uno de los jueces competidores apoyan sus respectivas jurisdicciones, y encuentra que las del juez de Durango son sobremanera fundadas, y á fin de que esta respetable sala se persuada tambien de ello, el fiscal hará un ligero extracto de este negocio, en cuanto baste á su objeto.

Primeramente: D. Juan N. Flores, celebró por escritura pública en la ciudad de Durango un contrato de compañía con D. Pedro y D. José M. Martínez. Este contrato tenia por objeto, que Flores entregara á sus socios las haciendas de Avilez y anexas, á fin de que cultivándolas los segundos se dividieran anualmente y por mitad y deducidos los gastos, el producto de aquellas fincas. Con efecto, los Martínez llegaron á ocupar las haciendas, Flores alega que contra su voluntad; pero el hecho es que Flores despues les reconoció su ocupacion, puesto que luego les demandó ante el juez del contrato, domicilio de los demandados, la rescision del contrato de sociedad y rendicion de cuentas con pago, por el tiempo que los referidos Martínez habian tenido las haciendas.

Puesta la demanda por Flores, la contestaron los demandados y en la contestacion reconvinieron al actor por daños y perjuicios; esto á su vez contestó á la mutua reconvenccion, y mandado abrir el juicio á prueba cada uno rindió las que á su respectivo derecho convenia. Concluido el término probatorio y con fecha 14 de Octubre de 1869, el juez de Durango mandó correr traslado á cada una de las partes para que alegaran de buena prueba. Sacados los autos por la parte de D. Juan N. Flores, la de los Martínez tuvo necesidad de acusarle rebeldía por medio de su apoderado el Lic. Hernandez. Entregados los autos se ofreció explayar la defensa al tiempo de la vista. A su vez Flores, tuvo que acusar re-